

¿De movimiento a partido?

Cambios y evolución del Movimiento Al Socialismo (1997-2010)¹

María René Barrientos Garrido

“Por encima de nuestra sigla MAS, que es un formalismo, nosotros somos un movimiento Pachacutik, de quechuas y aymaras, donde nos hemos planteado una cuestión de identidad y confrontación cultural (...)” (“Hemos pasado del Plan Cóndor al Plan Colombia”. Entrevista a Evo Morales. El Juguete Rabioso. Febrero 2002)

Introducción

El Movimiento Al Socialismo-Instrumento por la Soberanía del Pueblo (MAS-IPSP) es un aparato político que se ha consolidado progresivamente desde su fundación en la década de los 90. Las transformaciones que se generaron al interior de este “instrumento” político –apelativo utilizado por sus militantes y fundadores- se incrementaron a partir de la victoria del 2005. Su ingreso abrupto en el Estado, con una mayoría en el legislativo y sin la necesidad de generar un pacto² con otros partidos políticos para lograr la Presidencia, propició numerosos cambios no sólo al interior del MAS, sino también en el sistema político boliviano y en la forma de hacer política. Así, para ganar los siguientes procesos electorales el MAS-IPSP tuvo que abrir su formación para generar nuevas alianzas y ganar mayores adeptos.

Sin duda, el MAS-IPSP es una organización compleja, principalmente, en su constitución, puesto que la conforman múltiples organizaciones sociales que fueron integrándose en diferentes etapas, haciéndose cada vez más y más visibles a través de los sucesivos procesos electorales. A esto se suma que esta formación política se caracteriza por tener un único líder desde su fundación, Evo Morales, que lo largo de esta década se convirtió en eje articulador del MAS-IPSP y el denominado “proceso de cambio”.

En este trabajo de investigación se indagará sobre los orígenes del MAS-IPSP, a través de un análisis diacrónico, crítico y descriptivo de la trayectoria de esta formación. Los procesos electorales presidenciales conformarán el eje temporal para este análisis, debido a que en estos periodos se generan nuevas alianzas,

¹ El presente es un documento de trabajo que está en elaboración y sujeto a modificaciones, forma parte de un capítulo de una investigación mayor y fue adaptado para presentarlo en el seminario de investigación del Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Por lo que se ruega no citar ni difundir.

² Antes de la victoria del MAS-IPSP del 2005, la votación de los partidos políticos tradicionales no superaba el 30 por ciento de la ciudadanía por lo que debían recurrir a la formación de coaliciones gubernamentales para la designación del Primer Mandatario en el Parlamento. Este sistema de pactos para la conformación de gobierno se denominó presidencialismo pactado o semipresidencialismo.

especialmente, en la apertura de las listas de las candidaturas a legisladores. La revisión hemerográfica de diferentes medios de prensa y las entrevistas a grupos expertos son la base de esta parte del estudio.

Así en una primera etapa se abordará el contexto político previo en el que se conformó el movimiento cocalero, así se comprenderá la emergencia del liderazgo de Evo Morales y su relación con los movimientos campesinos-indígenas. En una segunda parte, se hablará sobre la conformación del MAS-IPSP, la adquisición de su sigla y sus primeros pasos electorales para llegar hasta el 2005. En un tercer punto se describirá la nueva conformación del MAS, los cambios internos a partir de su primera victoria y la apertura de la formación a nuevas organizaciones sociales y ciudadanas. En este entendido, desde las voces de sus fundadores e ideólogos se tratará en definitiva de responder a la pregunta: ¿Qué es el MAS-IPSP?.

1. El arribo de la democracia y la nueva política económica

Desde 1964, Bolivia estuvo sumergida en un sistema político dictatorial -casi ininterrumpido- por 18 años e inició una vida democrática a partir del 10 de octubre de 1982. El partido político centro-izquierdista Unidad Democrática y Popular (UDP) fue electo para gobernar este primer periodo, heredando un país con una hiperinflación del 22.000 por ciento, el peso de la deuda externa, instituciones resquebrajadas y la carencia de una clase política que apoyara el proyecto “udepista” en el parlamento³ (GARCÍA, 2008; LASERNA, 2008; MESA, 1997). Tres años más tarde, cercado por los conflictos sociales⁴ y numerosos problemas políticos internos, Hernando Siles Suazo, presidente por aquel entonces, renunció a su cargo y convocó a elecciones nacionales para evitar el desmoronamiento de la naciente democracia.

En estas nuevas elecciones participaron 18 partidos políticos, el número más alto de la historia democrática boliviana. Irónicamente, Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido del ex dictador Hugo Banzer Suárez, logró el respaldo del 28,57 por ciento de

³La UDP contaba con una minoría en el Parlamento (de 157 escaños apenas alcanzó 57) y un débil respaldo de otros partidos políticos.

⁴Laserna junto a Villarroel (2008) desarrollaron una investigación descriptiva sobre el grado de conflictividad en Bolivia desde 1970 al 2008, lapso en el que se registraron 11.893 conflictos sociales. En época democrática, los gobiernos que más conflictos sociales enfrentaron fueron: Unidad Democrática Popular (UDP) (1982-1985) con un aproximado de 1.825 protestas y un 54 por ciento de conflictos nuevos por mes por la creciente hiperinflación. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (1985-1989) enfrentó 1.180, periodo en el que se “relocalizó” (léase despido) a más de 27.000 mineros y se realizaron ajustes económicos estructurales. Acción Democrática Nacionalista (ADN) (1997-2002) estuvo cercado por 1.719 y se caracterizó por implementar el “Plan Dignidad”, cuyo fin era la erradicación del cultivo de hoja de coca y de lucha contra el narcotráfico. Finalmente, el último milenio, el presidente Carlos Mesa (2003-2005) enfrentó 1.042 conflictos en menos de dos años.

la ciudadanía; seguido por Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con el 26,42 por ciento; y Jaime Paz Zamora, del Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR) con el 8,86 por ciento (MESA, 1997:689). Debido a la fragmentación del voto, el Congreso -por prescripción Constitucional- tuvo que elegir al Presidente, siendo designado, por primera vez en la historia, el segundo: Paz Estenssoro, gracias al apoyo del MIR y otros partidos de izquierda. Esta unión de partidos impidió al ex dictador asumir el control del Ejecutivo, otorgando un nuevo matiz al sistema político, que en la jerga popular será conocido como “democracia pactada” o, más propiamente, “presidencialismo parlamentarizado” (MAYORGA, 2003 Y GARCÍA, 2003) o “presidencialismo híbrido”⁵ (Gamarra en PACHANO, 2006), ya que posteriormente se utilizará la misma fórmula para elegir al Primer Mandatario.

Si el escenario político era inestable, “el descalabro económico de los 80 puso a Bolivia en uno de los trances más graves de su historia” (MESA, 1997:680). Para 1985, la economía boliviana estaba por colapsar; el ejemplo más claro fue que el salario mínimo nacional llegó a ser de siete dólares (MESA, 1997:688). Por estos motivos, Paz Estenssoro, fundador y líder del MNR, proclamó la Nueva Política Económica, a través del Decreto Supremo 21060, optando por el modelo Neoliberal y abandonando la estructura estatista que regía hasta aquel entonces. Durante los próximos 17 años, gradualmente, se irán implementando otras leyes que fortalecerán este sistema: la privatización de las empresas estatales (posteriormente conocida como la “Capitalización⁶”), la Reforma Educativa y la Ley de Participación Popular, entre otras (SANJINÉS, 2004).

El Decreto Supremo 21060 tuvo el objetivo central de garantizar la estabilidad económica y un contexto de crecimiento económico moderado. La medida incluía la devaluación del boliviano y una tasa flotante contralada, el recorte del gasto público, el congelamiento de los salarios del sector público, la eliminación de los subsidios y controles gubernamentales sobre el comercio y sus precios, la privatización de las empresas estatales, la liberación total del mercado, la libertad de precios y libre oferta y demanda (BURKE, 2001:35; CABEZAS, 2005; ESCÓBAR, 2008; MESA, 1997:689).

⁵ Pachano (2006:16) explica que: “Este tipo de sistema busca la elección del Presidente de la República en el Parlamento, en caso de que no existiera un ganador absoluto en la votación directa (...) los resultados son la estabilidad política y la continuidad en la orientación de las políticas”.

⁶ Chong y López de Silanes (2005) explican que en Bolivia se capitalizaron (léase como la venta del 50 por ciento del capital de una empresa estatal a una inversora extranjera) cinco empresas estratégicas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Estas medidas permitieron importantes acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la reapertura de créditos al país y la negociación de la deuda externa.

Pese a que esta política tuvo éxito al momento de estabilizar la frágil economía boliviana⁷, lo hizo a un alto costo social con la privatización de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la desarticulación de los sindicatos mineros y la “relocalización” (léase como eufemismo de despido) de 23.000 mineros de los 30 mil que trabajaban en los centros mineros (BURKE, 2001; CABEZAS, 2005 Y ESCÓBAR, 2008:145). Al mismo tiempo, se dio un paulatino empobrecimiento del sector campesino por la ausencia de inversión pública en el área rural (ESCÓBAR, 2003:50). Ambos procesos derivaron en una fuerte migración a barrios periurbanos (como El Alto, en la ciudad de La Paz o algunas zonas de Santa Cruz, caso del conocido como Plan Tres Mil); otros, atraídos por el cultivo de la hoja de coca, se dirigieron a provincias como los Yungas, en La Paz y el Trópico del Chapare, en Cochabamba.

1.1. La hoja de coca y el movimiento cocalero

Pero, ¿cuál es la importancia de la hoja de coca en Bolivia y la emigración en este escenario? La coca para el mundo andino, para los pueblos indígenas del mundo andino, es un elemento identitario vital porque forma parte de sus usos y costumbres ancestrales –desde su alimento hasta su socialización– “es sinónimo de su cotidiano vivir” (CASTILLO, 2004). Sin embargo, a partir de la década de los 70 y 80, el cultivo de la coca pasó a ser trascendente en la economía boliviana por la expansión del narcotráfico en el mundo, y este producto adquirió connotaciones negativas hasta asemejarla con la cocaína, subproducto químico derivado de su tratamiento. Dentro de la economía boliviana, la producción de la hoja de coca respondía a entre el 30 y el 40 por ciento de la producción agrícola de Bolivia, la mitad de su PIB y el 66 por ciento de sus ingresos por exportaciones (BURKE, 2001: 361).

Para 1981, el “boom de la coca y cocaína”, explica Salazar (2008: 30), contaba con una consolidación protegida ya por los predecesores gobiernos dictatoriales. La preocupación central de los gobiernos emergentes del modelo neoliberal era la producción excedentaria de los cultivos de coca, especialmente preocupante por los compromisos asumidos con Estados Unidos en el marco de la “guerra contra las drogas”. En palabras de Sanjinés (2004): “la producción “excedentaria” de la coca pasó a ser materia prima para la elaboración de pasta base de cocaína. La coca contaba con un mercado asegurado y en expansión”.

⁷ Según Burke (2001: 358) la inflación bajó en 1986 a una tasa anual de 276 por ciento y en 1987 a un 15.

A esto se debe añadir que, para la década de los 80, el cultivo de la hoja de coca tuvo un incremento en su producción por la emigración surgida del proceso de relocalización. Basta mirar hacia el Trópico del Chapare, que fue colonizado por cerca de 50 mil familias, unos 250 mil habitantes –en su mayoría quechuas, seguidos por los aymaras y cientos de mineros- (ESCÓBAR, 2008:141 Y SALAZAR, 2008:14-15), quienes encontraron en el cultivo de coca su nueva forma de subsistencia, puesto que este producto puede ser cosechado hasta tres o cuatro veces al año. Aunque los estudios son contradictorios, García (2008: 385) señala que: “Hasta los años 90, la producción de hoja de coca proporcionaba, según Laserna, “entre 40 por ciento y el 75 por ciento del total de los ingresos de los colonizadores”, en tanto los estudios Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), estos recursos alcanzaban entre el 60 por ciento y el 95 por ciento de los ingresos de los cocaleros”.

En este sentido, Albó (2002: 74-75) explica que la mayoría de los campesinos no se establecieron en la zona del Chapare con la finalidad de introducirse en el narcotráfico, sino que sólo buscaron tener una “base económica segura”⁸, muchos de ellos –explica este autor- ni siquiera lograron tener tierras para producir la hoja y optaron por ser jornaleros como *cepes*⁹ o como *pisacocas*¹⁰, y se convirtieron en peones de esta economía paralela.

1.2. Guerra contra el narcotráfico

Así, el Trópico del Chapare se convirtió en el punto de mira de los gobiernos de la época neoliberal por el crecimiento de los cultivos de coca. Uno de los compromisos asumidos por los gobierno de Paz Estenssoro -en los años 80- con Estados Unidos y que deberían emular las siguientes administraciones, fue la lucha contra el narcotráfico. El eje principal de esta medida era el control y la erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca. Estas medidas se caracterizaron por el incremento en el uso de violencia y una fuerte represión en contra de los productores de hoja de coca. En otras palabras, el Chapare se convirtió en un campo de batalla (CASTILLO y DURAND, 2004; SALAZAR 2008:30; GARCÍA 2008:360).

⁸ Burke (2001:366) explica que: “el campesino típico gana de \$us 1000 a \$us 2500 por hectárea de plantas de coca, que significa cerca del cuádruple de los que podría ganar cultivando naranjas y paltas, las cosechas alternativas más rentables. El cultivador recibe \$us 2 por un kilo de hojas de coca, que significa de \$70.000 a \$us 90 mil por kilo de cocaína procesada pura en las calles de los Estados Unidos. De esta manera, mientras el agricultor de coca se gana la vida, el traficante de la cocaína hace su agosto”.

⁹ Se denomina así a los campesinos jornaleros que transportan grandes bultos de hoja de coca hasta lugares ocultos de la selva donde ésta es transformada en pasta base para la cocaína (Albó 2001:75).

¹⁰ Campesinos quienes ponen en riesgo su salud pisando la hoja de coca mezclada con kerosene en las pozas de maceración (Ibid).

En 1986 se lanzó el “Plan Trienal de Lucha contra el Narcotráfico”, cuyo objetivo central era: “erradicar las plantaciones excedentarias de coca en Bolivia, para eliminar la producción de cocaína (...) la erradicación forzosa de todos los cultivos de coca, 5.000 hectáreas en el Chapare y 5.000 en los Yungas” (SALAZAR, 2008:87). Este programa tenía dos componentes: uno de sustitución de la hoja de coca por productos alternativos y un programa de interdicción, el cual contó con tres mil millones de dólares, con el que se crearían las unidades de: Dirección de Reconversión Agrícola (DIRECO), UMOPAR y Coca Legal (GARCÍA, 2008:387 y SALAZAR, 2008:83-84), declarando al Chapare como “Zona Militar” e iniciando el entrenamiento militar de UMOPAR a cargo de fuerzas norteamericanas.

En 1988, se promulgó la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, más conocida como la Ley 1008. Esta norma definía las zonas legales e ilegales de producción de la hoja de coca y señalaba a cuatro provincias de Cochabamba (Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani), y tres de La Paz (Saavedra, Larecaja y Loayza) como zonas excedentarias que debían sustituir sus plantaciones de coca por otros productos apoyados por lo que la ley llamaba Programa Integral de Desarrollo y Sustitución (PIDYS) (GARCÍA, 200:387, SALAZAR, 2008: 145), y de antemano se establecía que esta producción estaba destinada a usos ilícitos.

Esta medida fue uno de los motivos para la resistencia de los sindicatos cocaleros ante la aprobación de esta ley, porque se estaban vetando sus fuentes de trabajo y condenaba al pequeño productor con ‘uno a dos años de cárcel a quien ilícitamente sembrare, plantare, cosechare, cultivare o colectare esta hoja’. En palabras de Castillo (2004), esta ley “persigue a los campesinos y no a los grandes del narcotráfico”. En ese mismo sentido, Albó (2002) indica que “contraviniendo el principio constitucional de inocencia presunta, presume más bien la culpabilidad de cualquier acusado. Distingue entre áreas de producción tradicional de la hoja de coca y otras –como el Chapare/Chimoré- de producción excedentaria a ser erradicada a toda costa. Para ello, se estableció allí una gran base militar norteamericana y esos pequeños productores o peones andinos pasaron a ser vistos como el ‘enemigo’ de esa ‘guerra’”.

En 1993, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), se planteó la política gubernamental “Opción Cero”, que tenía el objetivo de reubicar a la población del Trópico de Cochabamba a otras zonas rurales con programas de desarrollo rural; al igual que con Paz Estenssoro, esta política tenía la misión de fortalecer la erradicación forzosa –valga la aclaración, cada gobierno buscaba

disminuir el número de hectáreas de cultivo de coca permitidos- y la militarización del Chapare, pero con un aditamento más: la estigmatización e identificación del cultivo de coca con el narcotráfico (SALAZAR, 2008:200-220).

En esta gestión gubernamental, el movimiento cocalero participó en 1994 de la “Marcha por la vida, la coca y la soberanía nacional”. Durante 22 días, los productores de hoja de coca recorrieron a pie 620 kilómetros desde el Trópico del Chapare hasta la sede de gobierno (La Paz) pidiendo la salida de UMOPAR, DIRECO y del Departamento Estadounidense Antidroga (DEA en sus siglas en inglés) (GARCÍA, 2008: 429). También pedirán la despenalización de la hoja de coca. Un año más tarde (diciembre 1995), las mujeres cocaleras iniciarán otra marcha hasta La Paz – denominada “Marcha por la Vida y la Soberanía Nacional”-, en esta ocasión para evitar la intervención policial y militar del Chapare, además de para reclamar sobre la represión de las fuerzas de UMOPAR ejercida contra los cocaleros y la liberación de varios detenidos. La medida fue acompañada por una huelga de hambre.

En 1997, durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez, se diseñó el “Plan Dignidad”, cuyo lema se resumía en “coca cero” hasta el año 2002 y se buscaba la erradicación forzosa de los cultivos, pero sin compensación alguna ni diferenciación de las cosecha legales. Los cocaleros propusieron que se mantengan cinco mil hectáreas de plantaciones de coca en el Chapare y no así la imposición de acabar con el producto. Sin embargo, el gobierno no aceptó esta propuesta por el compromiso internacional asumido por el gobierno.

García (2008) y Salazar (2008) explican que los pilares de esta nueva política de antidrogas eran cuatro: desarrollo alternativo, prevención y rehabilitación, erradicación de la coca excedentaria e interdicción con “responsabilidad compartida” con la comunidad internacional. La faceta de este nuevo plan era el fortalecimiento militar y crearon la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Según Salazar (2008:366) estas unidades especializadas contaban con miembros especializados en tema de explosivos y francotiradores. La represión en contra de los cocaleros, durante esta etapa, fue una de las más fuertes de la historia de Bolivia: “estas luchas entre ambos bandos, se hicieron casi cotidianas, dando lugar a denuncias graves sobre el atropello de las fuerzas de erradicación y UMOPAR contra las familias cocaleras, según declaraciones de los propios cocaleros” (GARCÍA 2008:395).

Para el 2001, Banzer tuvo que dejar su cargo por motivos de salud, y Jorge Quiroga pasó a ser el presidente por sucesión constitucional. Durante ese corto periodo de tiempo hasta las nuevas elecciones, a través del Decreto 26415 se trataron de cerrar varios mercados para la venta legal de coca. Esta nueva normativa prohibía el secado, transporte y venta de la coca producida en el Chapare. Actividades –según Albó (2002:89)- que se vinculan más bien con los usos tradicionales de la hoja de coca y no así de la fabricación de la cocaína (GARCÍA 2008:411 y SALAZAR 2008). Tras un mes de intensa actividad en contra de la medida, bloqueos esporádicos y protestas en la ciudad de Cochabamba, los cocaleros lograron frenar la aplicación de este decreto - por lo menos por tres meses-, consiguiendo el pago de las indemnizaciones de los heridos y la libertad de los detenidos.

Con el cambio de gobierno, llegó una nueva política antidroga. Gonzalo Sánchez de Lozada, fue designado nuevamente como presidente el 2002, y durante su breve periodo gubernamental impulsó el “Plan Bolivia”, que, según Salazar (2008: 668), era una “réplica del Plan Colombia”, diseñado para “declarar una guerra de alta intensidad contra las organizaciones del Trópico de Cochabamba, quienes fueron identificados como grupos “narcoguerrilleros y narcoterroristas” regulares financiados por el narcotráfico”. Esto significaba la potenciación de la fuerza militar. Este plan no llegó a su culminación porque al año del ingreso a la Presidencia, en 2003, Sánchez de Lozada renunció debido a las múltiples protestas¹¹ que cercaron a su gobierno.

Pese a que no se tienen cifras oficiales, Salazar (2008:11-14) en su investigación señala que el costo social de las políticas de erradicación de coca derivó en el asesinato de 119 personas (8 bebés murieron asfixiados por el ataque con gases. 87 civiles fueron muertos por fuerzas regulares del ejército y la policía, y grupos

¹¹ Este gobierno enfrentó en menos de un año de gestión a dos fuertes conflictos nacionales. El primero surgió durante la segunda semana de Febrero de 2003 -denominada “Guerra contra el Impuestazo”-. El intento por parte del gobierno de incrementar el impuesto a los salarios fue el detonante para el inicio de las movilizaciones. La Paz fue el epicentro de esta contienda que se expandió al resto del país (Cochabamba y Santa Cruz), a esto se sumó el acuartelamiento de los policías; que derivó el enfrentamiento entre oficiales de la Policía y militares, principalmente, y también los manifestantes. El saldo fue de 33 muertos y 205 heridos.

El segundo conflicto –denominado la “Guerra por el Gas”- se produjo a los seis meses, septiembre-octubre, frente a rumores de la venta de gas por puertos chilenos, la población alteña (gentilicio que reciben los pobladores de la ciudad de El Alto, La Paz) inició una suerte de medidas de presión progresivas (bloqueo de caminos, manifestaciones, marchas, huelgas de hambre), las que culminaron con el cercó a la ciudad de La Paz a lo largo de seis semanas. La escasez de alimentos y combustible, principalmente, hizo que el Gobierno ordene el ingreso de militares a la ciudad de El Alto e inicie el desbloqueo, contrariamente a lo esperado, las movilizaciones recrudecieron hasta pedir la renuncia de Sánchez de Lozada. El saldo trágico de este conflicto fue 69 muertos y más de 400 heridos y sólo finalizó con la dimisión y huida del Presidente (AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2004 y RAMOS, 2004).

calificados como mercenarios y 24 uniformados perecieron en las confrontaciones). Entre 1982 y 2004, se registraron a 513 personas heridas por armas de guerra, 121 denuncias sobre tortura y 447 flagelados, además de más de 4.134 casos de detenciones y cerca de 5.349 casos de violación de derechos humanos que fueron reportados.

1.3. Formas de resistencia aprendidas desde El Chapare

La defensa de hoja de coca en el movimiento cocalero no sólo se fundamenta en lo económico, sino que forma parte de su identidad: es el símbolo y el mito de unificación de los productores (KOMADINA 2007: 124 y ESCÓBAR, 2008: 143) que llegó a connotar un principio de lucha integral: dignidad y soberanía nacional. García (2008:239) hace énfasis en que esta planta apelará a una función moral y de legitimación social dentro del movimiento y frente a lo público, creando una identidad étnica-campesina y rescatando el discurso comunitario, originario e indígena de quechuas y aymaras.

La complejidad y fuerza del movimiento cocalero (GARCÍA, 2008: 414; KOMADINA, 2007: 82) va más allá del número de sus afiliados -40 mil familias- y de su identidad. Quizás lo fundamental para su resistencia y sobrevivencia en el tiempo fue su organización dual, la cual mezcla las prácticas del sindicato minero con la visión indígena-comunitaria¹²:

“(...) es la puesta en marcha (...) de una maquinaria sindical donde se entrecruzan responsabilidades, compromisos, mecanismos de coordinación y abastecimiento, todas, redes muy densas entretejidas con la memoria organizativa de comunidades indígenas, de los mineros relocalizados, y de los sindicatos agrarios, que es de donde proceden los actuales productores de coca del Chapare” (GARCÍA 2008: 415).

El sindicato comunitario tiene tres niveles de organización: el sindicato de base, las centrales, las federaciones (Del Trópico, Chimoré, Carrasco Tropical, de Mujeres del Trópico de Cochabamba, Yungas del Chapare, Centrales Unidas y Mamoré) y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Dentro de cada Federación existen unas 60 centrales, que agrupan a su vez entre 600 y 700 sindicatos de base (Evo Morales en GARCÍA, 2008: 391). El sindicato chapareño,

¹² Acerca de su estructura organizacional, existen dos posturas: una que asegura que la estructura sindical fue adquirida y aprendida de los mineros relocalizados y la otra que hace énfasis en la comunidad indígena. Komadina (2007: 82-85) contraponen las posturas de García Linera y la de Stefanoni y Do Alto, dichas mencionan en el movimiento cocalero se articulan las memorias campesinas, indígenas y mineras como sostén ideológico, cultural y organizativo de la identidad cocalera del trópico de Cochabamba; en cambio, Spedding, afirma que “aunque es cierto que hay ex mineros en el Chapare, no representan un grupo numeroso ni uno que haya tenido una influencia decisiva en el sindicato campesino”.

según el autor, comenzó a aparecer desde 1953 y se potenció desde la década de los 90 y con la guerra contra las drogas. Es durante este tiempo que esta estructura se va consolidando, hasta formar en 1992 la Coordinadora. El sindicato será transversal en la vida cotidiana de los colonos. Komanida (2007:82) indica que incluso se inmiscuye en el ámbito privado y familiar de los cocaleros. Spedding (2005) compara a este tipo de organización campesina con “una organización de fines múltiples que cumple con funciones de gobierno a nivel comunal” desde la repartición de tierras y la regulación de la fuerza de trabajo a la circulación de la hoja de coca (KOMADINA 2007: 82-85 y GARCÍA, 2008: 393).

Además, esta estructura está encargada de sancionar o multar a los productores de coca que no asistan a los ampliados o a las movilizaciones convocadas por la Federación de Cocaleros. Las multas van desde el trabajo comunal hasta la pérdida del terreno o “chaco¹³” por parte del afiliado. Para Spedding (2005) esta es una forma de evitar la corrupción de los dirigentes y los afiliados.

Por estas características, los repertorios de acción de los cocaleros (bloqueos de caminos, marchas, manifestaciones y huelgas de hambre) lograrán resultados efectivos en sus medidas de presión. A modo de ejemplo, Komadina (2007:86) explica que en los bloqueos, los productores tienen un sistema de rotación de asistencia y relevos en los lugares de conflicto, que permite la prolongación de esta medida de presión por semanas o incluso meses.

Dentro de estas estructuras de movilización, también están los Comités de Autodefensa. García (2008: 399-400) explica que estos grupos, conformados por jóvenes y jornaleros, cuya finalidad es “vigilar y obstruir las sendas que conducían hacia los cicales para evitar su erradicación”, fueron vitales en la década de los 90 para hacer frente a los policías antinarcóticos. Otro tipo de suborganización, es la policía sindical o disciplinaria, encargada de vigilar los ampliados y las asambleas: “son compañeros mayores para que se los respete más. Ellos controlan que no ingresen borrachos o con sombreros” (Evo Morales en SALAZAR 2008:225)

Otra peculiaridad, es la forma en la toma de decisiones, la cual se la realiza de “abajo a arriba” hasta conseguir un consenso. Es decir, los afiliados a los sindicatos siempre serán consultados para llevar adelante una medida de presión o no, y para esto se

¹³ Dícese al terreno en el que cultivan la hoja de coca.

realizan asambleas y ampliados. Estos espacios, más allá de ser deliberativos, también son de formación de opinión pública e información. García (2008: 417), quizás de una forma exagerada, llega a comparar el ampliado de las Seis Federaciones con el parlamento regional con funciones legislativas y ejecutivas. Por estas características y su estructura, este autor, verá en este movimiento “el más activo de esa década (de los 90), y el que más muertes tendrá entre sus miembros por efecto de la represión militar” (García, 2008: 417).

2. Los orígenes del MAS-IPSP

El movimiento cocalero, si bien al principio se había conformado como una organización de resistencia local (STEFANONI, 2002), pronto se convirtió en una fuerza movilizadora a nivel nacional¹⁴. Sin embargo, la resistencia en las calles sólo permitía reformar, modificar y cambiar leyes, pero no así la estructura interna del país: los productores necesitaban representantes dentro del Parlamento. Requerían conformar un “instrumento político”.

Sanjinés (2004) señala que “este movimiento político se formó por la extrema necesidad de sus militantes. Ellos supieron desde el principio que sólo contaban con su cohesión interna para enfrentar los planes gubernamentales que pretendían sustituir los cultivos de coca por cítricos o plátanos sin rentabilidad alguna”. Sin embargo, se habían generado aprendizajes desde la resistencia como movimiento campesino, su estructura, su forma de cohesión y ante todo, la elaboración de un discurso cohesionado. Para 1994, el contexto de oportunidad política estuvo definido por la promulgación de la Ley de Participación Popular¹⁵ (STEFANONI, 2002; KOMADINA, 2007 y ZEGADA, 2008), la cual fue aprovechada por “el astuto Evo y su movimiento cocalero” (ALBÓ 2002:76) quien en su emergencia local, conseguirá establecer las bases de la victoria nacional el 2005.

¹⁴ La participación del movimiento cocalero en la Guerra del Agua (abril 2000) y la Guerra del Gas (octubre 2003) fueron determinantes para la evolución de ambos conflictos de repercusión y adherencia nacional. El primero se generó en la ciudad de Cochabamba por la firma de un preacuerdo con la empresa francesa Betchel S.A. para privatizar el servicio de agua, lo que derivaría en el incremento del costo del servicio, este conflicto expulsó a la inversionista privada. El segundo

¹⁵ Esta normativa, “establece nuevas fronteras administrativas y políticas para los municipios (...), concede a los municipios el 20 por ciento de los ingresos del Tesoro Nacional, de los cuales el 90 por ciento debe ser utilizado en inversión y no en gastos corrientes (...) reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país” (Artículo 1 y 2 de la Ley de Participación Popular en KOMADINA 2007:28-29). Para Sanjinés (2004) y otros autores esta ley buscó invisibilizar, controlar y disolver las prácticas políticas comunales, empero, los cocaleros se valieron de la misma para fortalecer su instrumento político y llegar a comunidades que habían sido abandonados por los partidos tradicionales.

En este contexto, en 1995 las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, junto con otras organizaciones sociales (la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia -CSUTCB-, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia -CSCB-, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia -CIDOB-, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa -FNMCB-BS) crean el instrumento político. Los movimientos indígenas a través de sus entidades la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markasdel Qollasuyo (Conamaq) apoyarán la medida pero no se constituyen dentro de la estructura formal del MAS.

“Estas tres organizaciones gestan, permítame la expresión, paren al IPSP y entonces por lo tanto estas tres organizaciones son las dueñas diríamos originarias –bueno el término originario puede sonar confuso- son las madres de la criatura pongámosle así. Pero la criatura ha crecido tanto que se la está comiendo a la madre entonces ese es un aspecto importante, sale emerge de estas tres organizaciones este instrumento político.”(Entrevista Lorenzo Soliz, director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, septiembre 2014).

En una primera instancia, el instrumento político fue llamado Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), para después adoptar “por necesidad” (HARNEKER, 2008:131) la sigla del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)¹⁶ y entrar en carrera electoral (CASTILLO, 2008 y ZEGADA, 2008).

Pese a que 1999 es el primer año que el movimiento cocalero se presenta a las elecciones con la sigla del MAS-IPSP, ellos participaron del proceso electoral municipal del 1995 y las nacionales del 97 con la sigla prestada del partido político Izquierda Unida (IU), debido a que la ASP no logró el reconocimiento de la Corte Nacional Electoral (CNE) (STEFANONI 2002:26 y ZEGADA 2008:41). Komadina (2007:31) señala que los resultados de las elecciones municipales del 95 fueron una sorpresa, porque obtuvieron 11 alcaldes y 49 concejales, todos campesinos quechuas, en la región del Chapare. En 1997, IU logró una votación del 3,7 por ciento, y Evo Morales, secretario ejecutivo de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, junto a otros tres dirigentes campesinos, fueron elegidos diputados. Morales, explica Komadina (2007), logró la mejor votación como legislador de todo el país: 70,3 por ciento, demostrándose con esto que una nueva organización política se formaba, cuyo bastión era el Chapare.

¹⁶ El movimiento cocalero tuvo que prestarse la sigla del MAS, ésta perteneció a un partido de corte falangista y se denominaba Movimiento al Socialismo-Unzaganista (MAS-U), y fue cedida por David Añez Pedraza, representante legal y ex parlamentario de un partido de derecha: Falange Socialista Boliviana (FSB) (Komadina y Geffroy: 2007).

En 1999, el MAS-IPSP ingresó a la carrera electoral municipal y logró el 3,3 por ciento del electorado en todo el país, siendo que en Cochabamba obtuvo el 39 por ciento de respaldo (KOMADINA 2007:33). En 2002, el MAS consiguió el segundo lugar en las elecciones nacionales, con un 20,94 por ciento, a menos de dos puntos del MNR (22,46), Nueva Fuerza Republicana (NFR) –otro partido que se consolidó en el departamento de Cochabamba- logró el 20,91, el MIR obtuvo un 16,32 por ciento y el ADN un tres por ciento. La fragmentación del voto ciudadano, reveló la profunda crisis de los partidos políticos tradicionales y la agonía del modelo de democracia pactada y el sistema de economía neoliberal (ROMERO, 2006:35).

En los resultados de las elecciones del año 2002, por primera vez se pudo al interior de las instituciones representativas a las ‘dos Bolivias’, aquella de traje y corbata, que condujo el país durante más de 20 años, y la otra de pollera y manta, que había sido excluida durante toda la vida republicana del país andino (STEFANONI 2002:34 y SANJINES 2004).

El gobierno del MNR, a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada, carecía de legitimidad en la ciudadanía y en el Congreso no tenía una mayoría de legisladores para aprobar sus proyectos. La crisis política derivó en una fuerte convulsión social a partir de febrero del 2003 y luego en octubre, con la “Guerra del Gas”. El resultado fue la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y la convocatoria anticipada a elecciones nacionales. En 2005, el MAS, liderado por Evo Morales, finalmente ganó las elecciones generales con una victoria contundente del 54 por ciento de votos en todo el país.

2.1. Algunas características de su estructura antes del 2010

“Sólo con la organización de este instrumento político que nos permitió llegar al gobierno y, buscamos la toma del poder, empezamos a frenar las medidas represivas de los regímenes de turno que obedecían a órdenes del gobierno norteamericano” (Evo Morales en SALAZAR, 2008:1).

La estructura orgánica del MAS antes de su primera victoria respondía a la estructura de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, lo electoral se subordina a lo sindical, y por ello los cocaleros lo llaman “el instrumento político”, el cual pretende, a partir de este apelativo, alejarse de toda relación de los partidos políticos gobernantes. (Stefanoni, 2002; Komadina, 2007 y Zegada, 2008).

“El MAS-IPSP es como la cáscara vacía, si quieres decirlo así. Es como un apodo, te dicen lo mismo todos los años y terminas acostumbrando pero no significada nada. El nombre inicial era Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, nuestros colores eran otros el violeta, el café y el verde. Pero no querían que entremos en competencia

electoral. Así nos hemos prestado una sigla, mejor dicho nos han regalado. ¿Qué íbamos a decir? Ay no, porque era de la Falange, no pues se lo necesitaba". (Entrevista Gustavo Torrico. Septiembre 2014).

Es evidente que para los seguidores y fundadores del MAS, un partido político – denominado tradicional- es sinónimo de corrupción, nepotismo, represión, neoliberalismo y representa a las minorías oligárquicas de un país. En cambio, este “instrumento político” nace, es y responde a las mayorías¹⁷ (HARNECKER, 2008:70).

García Linera (2006: 25-31), en un ensayo corto, sostiene que el MAS es una proyección “absoluta de la autorepresentación de los propios movimientos sociales”, la cual no está construida en la praxis. Lo segundo, es la construcción de la identidad indígena, pero flexible, que permite el acoplamiento de los “mestizos, los blancos y a quien fuera” al instrumento. Un tercer componente es su ideología, la cual transita entre lo nacional-popular y el marxismo ortodoxo.

La estructura organizativa del MAS es dual: la sindical-comunitaria (heredada de los cocaleros) y la parlamentaria (construida tras la profesionalización de los funcionarios políticos en el Congreso y las victorias electorales evolutivas de este movimiento político) (GARCÍA, 2008:433). Aunque la segunda está subordinada a la primera, hoy por hoy, se convierte en un estado de tensión, dado que muchos de los legisladores no pertenecen ya a los movimientos sociales originales en su conformación y no son por tanto dirigentes.

Autores como Harten (2007) hablan de una estructura previa “dual”, que hasta aproximadamente mediados de 2004 se habría mantenido en el MAS, gobernado de la misma manera que las organizaciones de los productores de coca en el Trópico y mostrando la misma cultura organizativa. Esa estructura previa al 2004 se definiría, por una parte, por una estructura “oficial”, formulada

¹⁷ Desde ese planteamiento, algunos autores como Archondo hablan de la “excepcionalidad boliviana”, poniendo énfasis en que la realidad de éste país contradice a muchas de las teorías políticas actuales, que separan cada vez más los movimientos sociales de la política institucionalizada: “Diarmuid Maguire (1995) señala que hoy existe una tendencia hacia una «separación cada vez mayor entre el mundo autónomo de los movimientos de protesta y las instituciones políticas». La misma idea es reafirmada por Alberto Melucci (1985), quien observa a los movimientos sociales en el marco de «redes sumergidas» que, cuando salen a la luz, lo hacen solo para desafiar a las autoridades. Sin embargo en Bolivia ha ocurrido lo contrario: los movimientos sociales han emergido para copar las estructuras del Estado e incluso para reemplazar a las autoridades.” (Archondo, 2007:89).

En este sentido, Archondo (2007:91) habla de la “falta de oportunidades políticas” (dando la vuelta al esquema de Tarrow, como la causa más influyente y decisiva en la transformación de movimientos sociales en supuestos “partidos políticos”, o dicho de otro modo, “se elige esta opción porque el sistema social no ofrece otras alternativas de negociación y porque las elites se han mantenido unidas para bloquear cualquier concesión por parte del Estado”).

“en las estatutos partidarios estableciendo una estructura elaborada y jerárquica que es bastante típica de un partido político con oficina nacional, subsidiarios departamentales y locales (...) una descripción y distribución clara y rígida de responsabilidades (...) la estructura no está descentralizada y los agentes locales no tienen autonomía. (...) Casi todas las decisiones son tomadas por el liderazgo nacional y no está previsto un mecanismo efectivo de participación de las bases” (Harten, 2007:10).

Por otro lado, una estructura “informal”, que trata al MAS como un “instrumento político” de las organizaciones sociales, se aleja de los estatutos registrados en la Corte Nacional Electoral (CNE) y le influye una mayor “cultura participativa”. Lo más interesante de este nivel es que en realidad no es una estructura del MAS, sino más bien hay que “pensar en la organización del movimiento social que incluye el MAS como un aspecto de su organización” (Harten, 2007:10). Como ejemplo,

“en todas las reuniones del movimiento en el Trópico hay un punto del orden del día que trata del ‘instrumento político’. De tal manera las organizaciones de base están informadas sobre las decisiones o eventos acerca del MAS y están involucradas en el proceso de toma de decisiones. La participación funciona igual que el movimiento social, lo que quiere decir que existe una dinámica desde abajo para deliberar y consensuar sobre temas de importancia para el ‘instrumento político’” (Harten, 2007:10).

Stefanoni y Do Alto (2010) recuerdan que “la alianza entre los cocaleros construyó este campo político sui géneris (...) en el marco de una cultura política sindicalista”, la cual, en su actual expansión, hace difícil a los sindicatos tener el control de las nuevas adhesiones y, especialmente, que estas respondan al mandato del los movimientos. Lo que en definitiva deviene en la concentración de poder en la figura de Evo Morales. Komadina (2007:108-110) ve en Evo al líder imprescindible del proceso de cambio, por tener la capacidad de articular a todos los movimientos sociales que conforman el MAS, además de ser el portavoz oficial del trance del movimiento cocalero hacia el movimiento político. Basta ver los procesos electorales vividos por Morales: es claro que sus bases (primero el Chapare y luego El Alto en La Paz) han sido fieles a la imagen que representa, lo que le permitió en primera instancia llegar a la Presidencia.

No obstante, a partir de 2004 el “MAS se ha embarcado en un proceso de institucionalización de sus propias estructuras partidarias” (Harten, 2007:11). El hecho más crítico de este cambio surgió de la decisión de apertura de las listas electorales antes de las elecciones municipales en 2004 y de transferir el control sobre la selección de candidatos a organizaciones locales, sin un férreo control de los antecedentes de los mismos por parte de la Comisión Política Nacional del MAS. Esta estrategia, motivada por la articulación del mayor número de alianzas posible en pos de una posible victoria electoral en 2005, tornó las estructuras de base del MAS en cambio radical al dejar de ser el ‘instrumento’ de los productores de coca -aunque,

como matiza Harten (2007:11), ellos no cesaron de percibir al MAS de esta manera-, para convertirse en un partido capaz de atraer “a todos los desilusionados del sistema político y económico existente y de ser un partido que prestaba atención en particular a intereses urbanos subalternos” (Harten, 2007:11).

El MAS, que cuenta con una base social de sostén estable -lo que reduce el riesgo de volatilidad electoral y lo que podría darle el apoyo popular indispensable para implementar sus reformas estructurales-, puede correr cierto riesgo de fagocitación debido precisamente a su éxito político y social. Los cambios organizativos después de 2004 “han introducido tensiones entre el movimiento social y la estructura partidaria, puesto que otras personas llegaron a posiciones influyentes y advocaron un enfoque más vertical en las relaciones partido-movimientos” (HARTEN, 2007:17). Algunos, este cambio organizativo lo han tomado como una traición a los principios del “instrumento político”. Además, las reivindicaciones de los movimientos han sido articuladas por agentes extraños y de forma muy distinta a como acostumbraban anteriormente a hacer. Estas disidencias anuncian “el peligro de perder el apoyo voluntario de organizaciones sociales si el MAS va muy lejos en formalizar sus estructuras” (HARTEN, 207:17).

Referencias

ALBÓ, Xavier. *Pueblos indios en la política*. La Paz-Bolivia: Plural Editores/CIPCA. 2002.

AMNISTÍA INTERNACIONAL. Bolivia. Crisis y justicia. *Jornadas de violencia en febrero y octubre de 2003*. <http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR180062004>. Noviembre-2004.

ARCHONDO, Rafael. La ruta de Evo Morales. *Nueva Sociedad*. 2007, 209. Pp. 82-99.

BURKE, Melvin. *Estudios críticos del Neoliberalismo*. La Paz-Bolivia: Plural Editores. 2001.

CABEZAS, Marta. Bolivia en tiempos rebeldes. Coyuntura y causas profundas de las movilizaciones indígenas populares. *Revista de Antropología Iberoamericana*. 2005, 41.

CASTILLO, Mayarí. Movimiento cocalero en Bolivia. Violencia, discurso y hegemonía. *Gaceta de Antropología*. 2004, 20. URL: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=11115474>

CHONG, Alberto y López de Silanes, F. *Privatization in Latin America. Myths and Reality*. Palo Alto: Stanford University Press, 2005.

ESCÓBAR, Silvia. Demandas ignoradas, políticas anticampesinas. Ajuste de liberalización y las causas del conflicto social. *OSAL*. 2003, 12 (IV).

ESCOBAR, Filemón. *De la Revolución al Pachakuti. El aprendizaje del respeto recíproco entre blancos e indios*. Cochabamba-Bolivia: Garza Azul. 2008.

GARCÍA Linera, Álvaro. *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. Bolivia: Plural editores, 2008.

HARTEN, Sven. “¿Hacia un partido “tradicional”? Un análisis del cambio organizativo interno en el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En línea], Coloquios, mayo-2007. URL : <http://nuevomundo.revues.org/index4468.html>

KOMADINA, Jorge y GEFROY, Celine. *El poder del movimiento político. Estrategia, tramas organizativas e identidad del MAS en Cochabamba (1999-2005)*. La Paz-Bolivia: Fundación PIEB, 2007.

LASERNA, Roberto. El caudillismo fragmentado. *Nueva Sociedad*. 2007, 209. Pp. 100-117.

LASERNA, Roberto y Villarroel, C. *38 años de conflictos sociales en Bolivia. Descripción general por periodos gubernamentales (Enero de 1970 a enero de 2008)*. La Paz: Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), COSUDE e Instituto para la Democracia, 2008.

MAYORGA, Fernando. El gobierno de Evo Morales: entre el nacionalismo y el indigenismo. *Nueva Sociedad*. 2006, 206. Pp. 4-13.

MESA, Carlos; Mesa, J. y Gisbert, T. *Historia de Bolivia*. La Paz: Editorial Gisbert, 1997.

MELUCCI, Alberto. *Vivencia y convivencia. Teoría social para una era de la información*. Madrid: Editorial Trotta, 2001.

PACHANO, Simón. El peso de lo institucional: auge y caída del modelo boliviano. *América Latina Hoy*. 2006, 43. Pp. 15-30.

ROMERO, Salvador. Análisis de la elección presidencial de 2005 en Bolivia. *América Latina Hoy*. 2006, 43. Pp. 31-61.

SALAZAR, Fernando (et, al.). *Kawsachun coca: El costo humano de las políticas de erradicación de los cultivos de coca en el trópico de Cochabamba-Bolivia (1980-2004)*.

La Paz-Bolivia: Instituto de Estudios Sociales y Económicos y Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico. 2008.

SANJINÉS, Javier. Movimientos Sociales y Cambio Político en Bolivia. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 2004, 10/1. Pp 203-218.

STEFANONI, Pablo. *El nacionalismo indígena como identidad política: La emergencia del MAS-IPSP (1995-2003). Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe*. Programa Regional de Becas CLACSO, 2002.

STEFANONI, Pablo y Do Alto, H. Las ambivalencias de la democracia corporativa. *Le Monde Diplomatique*, 2010. Pp. 26-30.

RAMOS, Édgar. *Agonía y rebelión social. 543 motivos de justicia urgente*. La Paz: Presencia, 2004.

ZEGADA, Ma. Teresa, et al. *Movimientos sociales en tiempos de poder. Articulaciones y campos de conflicto en el gobierno del MAS*. La Paz-Bolivia: Plural Editores y Cuarto Intermedio, 2007.